



## RESUMEN Y PROSPECTIVA

- **Reacomodo de organizaciones criminales en Ciudad Juárez provoca repunte de violencia.** (p. 3). Esta semana en Ciudad Juárez hubo un alto número de incidentes violentos y homicidios. Tan sólo en los primeros tres días de noviembre se registraron 21 homicidios, más nueve del 31 de octubre. En octubre se registraron casi 100. El alcalde de este municipio, Cruz Pérez Cuéllar, y su secretario de seguridad atribuyeron el repunte de la violencia a un reacomodo territorial de las organizaciones criminales y una disputa por el control del narcomenudeo y tráfico de metanfetaminas. En respuesta a esta ola de violencia hubo un importante despliegue de elementos policiales. Es probable que la situación de violencia en Juárez y en el estado de Chihuahua, donde también ha aumentado la violencia en general, continúe en las siguientes semanas e incluso meses si es correcta la hipótesis de que se trata de un reacomodo de liderazgos y control territorial, sobre todo considerando la coyuntura electoral y, como otra variable importante, la llegada de caravanas de migrantes a este municipio.
- **Chiapas registra una ofensiva del CJNG en varias zonas.** (p. 5). Esta semana se dieron varios sucesos violentos que se enmarcan en una estrategia de expansión territorial del CJNG. En respuesta, hay un fenómeno generalizado de surgimiento de grupos armados en las comunidades afectadas. Destacamos ataques del CJNG contra las Fuerzas Armadas en Villa Corzo y San Cristóbal de las Casas, el asesinato de un maestro activista en Chicomuselo, conflictos entre autodefensas en Pantelhó y Frontera Corozal, y un ataque armado contra un exdirector policiaco de Ocozocoautla. Estamos ante una situación de riesgo de amplificación de la violencia en la medida en que la contienda electoral de 2024 desestabilice arreglos políticos y pactos criminales.
- **Aumentan tensiones entre grupos criminales tamaulipecos.** (p. 7). A partir de la formalización de una tregua en julio de 2021 entre grupos criminales, la violencia disminuyó a un ritmo acelerado en Tamaulipas. Esta tendencia reflejó dos circunstancias: por un lado, la ausencia de hostilidades entre grupos criminales firmantes (la mayor parte de los grupos que surgieron del proceso de atomización del Cártel del Golfo) así como la fortaleza de la Policía Estatal. Sin embargo, recientemente uno de éstos, Los Escorpiones, relanzó una ofensiva en contra de Los Metros (probablemente, al percibir que éstos apoyaban a una facción de Los Zetas Vieja Escuela). En el mediano plazo, es probable que la violencia criminal aumente en Tamaulipas (en los últimos tres meses, de julio a sep-

tiembre, ya escalaron a más de 20 víctimas letales del crimen organizado mensuales, cunado en mayo apenas se registraron dos de estas víctimas).

- **Nuevas amenazas a criminales locales evidencian la expansión del CJNG en Hidalgo.** (p. 9). La aparición de mensajes firmados por el CJNG en el municipio de Zempoala contra asaltantes, ladrones de combustible y narcomenudistas, muestra la intención del cártel de consolidar su presencia en nuevos municipios del sureste de Hidalgo y de subordinar a organizaciones criminales locales. Por su parte, las autoridades de seguridad exhiben desconfianza y mala comunicación entre las diversas corporaciones: el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo negó la presencia del CJNG, mientras que el encargado estatal de la SEDENA confirmó su presencia en 20 municipios, especialmente por donde corren los oleoductos de PEMEX. Sin prácticas de cooperación entre las corporaciones de seguridad, el CJNG continuará consolidando su presencia en Zempoala, Tepeyahualco y Ciudad Sahagún.
- **El asesinato de los ocho hombres encontrados en Durango podría estar relacionado con el tráfico de fentanilo en Sinaloa. Ambos estados evitan involucrarse en el caso.** (p. 11). El día 28, se encontraron ocho cuerpos, incluyendo el de un niño, en Tamazula, Durango. Los extintos fueron levantados y presuntamente asesinados en Culiacán, Sinaloa, por lo que la autoridad duranguense se negó a continuar el caso. Por su parte, la Fiscalía de Sinaloa tampoco acepta responsabilidad en el incidente. Mientras tanto, no hay líneas de investigación ni información de los vínculos de estas personas entre sí o con algún grupo criminal; sólo trascendió que se les acusó de traición en un narcomensaje. Entre septiembre y principios de octubre, habitantes de Culiacán y Badiraguato reportaron sobrevuelos nocturnos de la Marina y el Ejército; autoridades negaron que se tratara de un operativo. El 2 de octubre aparecieron mantas que prohibían el tráfico y venta de fentanilo atribuidas a Los Chapitos. El día 20 la Marina aseguró una casa y detuvo a dos personas en el fraccionamiento donde fueron levantadas las víctimas de Tamazula, sin que exista un informe oficial. Por la concatenación de sucesos es posible que la masacre esté vinculada a la orden de Los Chapitos de prohibir la venta fentanilo. Se espera que este tipo de eventos violentos continúen en Sinaloa en el corto plazo.
- **Después de una semana de la destrucción ocasionada por el paso del huracán OTIS en Acapulco, el tema de la inseguridad comienza a perfilarse como el gran reto para su reconstrucción.** (p. 14). Dada la magnitud de la población afectada en Acapulco que se estima en más de 700 mil personas, y por las condiciones sociales de pobreza y marginación que se han acentuado con el paso del huracán OTIS, el tema de violencia comienza a perfilarse como la gran preocupación para emprender la reconstrucción del Puerto. Se ha anunciado el establecimiento de un cuartel de 250 elementos de la GN en cada colonia mayor de mil habitantes para salvaguardar la propiedad de casas habitación, pequeños negocios y la convivencia vecinal. Sin embargo, la sociedad ha comenzado a tomar acciones propias ante la percepción de que el restablecimiento de la energía

eléctrica y la recuperación del empleo tomará tiempo. Se han establecido provisionalmente guardias vecinales nocturnas, que prácticamente implican toque de queda y el cierre del paso a cualquier persona desconocida. Asimismo, empresarios hoteleros han establecido guardias para evitar nuevos saqueos. Es previsible que esta situación de inseguridad prevalezca e incluso pueda incrementarse, dado que los grupos delincuenciales han perdido momentáneamente fuentes de ingreso por extorsión de comercio, bares y transporte. Será fundamental mantener una presencia amplia de la GN para contener este riesgo, este despliegue de fuerzas en Acapulco podría debilitar la vigilancia en otras zonas del estado.

- **Se han registrado 361,466 homicidios dolosos en los últimos tres gobiernos federales, de los cuales el 70% se relaciona con víctimas letales del crimen organizado.** (p. 16).

Lantia Intelligence presenta un análisis comparativo de la evolución de homicidios dolosos en los últimos tres sexenios. Los principales hallazgos indican que durante el sexenio de Felipe Calderón (FCH) se registraron 17,256 homicidios al año en promedio, en la administración de Enrique Peña (EPN) aumentaron en 21.5% y terminaron con un promedio anual de 20,969 homicidios. En lo que va del gobierno de AMLO ya se han registrado 6,303 homicidios más que en toda la administración de EPN, se estima que el sexenio finalizará con 27,251 homicidios al año y, por tanto, un aumento del 30.0% respecto al periodo de EPN y del 57.9% respecto al de FCH. Las entidades con el deterioro más notable son Baja California, el cual se encontraba en la octava posición en la administración de FCH y sube al segundo lugar en la actual; Guanajuato, el cual se encontraba en el lugar 17 y actualmente es el primer lugar en homicidios dolosos; y Michoacán, que escaló del lugar 11 al lugar 5.

## ANÁLISIS



### Reacomodo de organizaciones criminales en Ciudad Juárez provoca repunte de violencia

#### DINÁMICA CRIMINAL

Esta semana en Ciudad Juárez hubo un alto número de incidentes violentos y homicidios. Tan sólo en los primeros tres días del mes de noviembre se registraron 21 homicidios, más nueve del 31 de octubre. En octubre se registraron casi 100. El alcalde de este municipio, Cruz Pérez Cuéllar y su secretario de seguridad atribuyeron el repunte de la violencia a un reacomodo territorial de organizaciones criminales que operan en este municipio clave por su conexión con Texas, en Estados Unidos, para el narcotráfico. En particular, se ha mencionado que existe un conflicto por el dominio del narcomenudeo de metanfetaminas, también conocidas como "cristal". Sin embargo, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales subrayó que no parece que la disputa sea por un sector del municipio en particular, ya que los asesinatos han ocurrido en diferentes puntos. Indicó que su

principal hipótesis era que había una disputa a raíz de posibles cambios en las estructuras de mando de las organizaciones y que parte de la violencia se debía a la intención de crear miedo en la población en general y grupos rivales.

En este municipio tenemos registro de la operación de 21 organizaciones criminales entre las cuales hay 12 bandas independientes, donde destaca la Mara Salvatrucha, entre otras; y de las restantes, se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su aliada "La Línea", también conocida como Nuevo Cártel de Juárez; y el Cártel de Sinaloa, aliado con otras seis organizaciones.

En respuesta a esta oleada de violencia hubo un importante despliegue de elementos policiales. También se acordaron zonas prioritarias de vigilancia y patrullaje con el propósito de impedir más hechos de violencia y de arrestar a perpetradores. También se solicitó la colaboración de la ciudadanía para realizar denuncias. Hasta el momento sólo se ha reportado a un detenido como probable responsable de uno de los múltiples asesinatos registrados en la semana. Vale mencionar que los *modus operandi* han sido distintos, pues en algunos casos se encontraron cuerpos con signos de tortura y balazos, mientras que en otros casos sólo fueron ejecuciones con armas de fuego de manera rápida en los domicilios o negocios de las víctimas. Las diferencias podrían no significar nada, pero también existe la posibilidad de que los móviles hayan sido distintos, así como el grupo al que pertenecían los perpetradores.

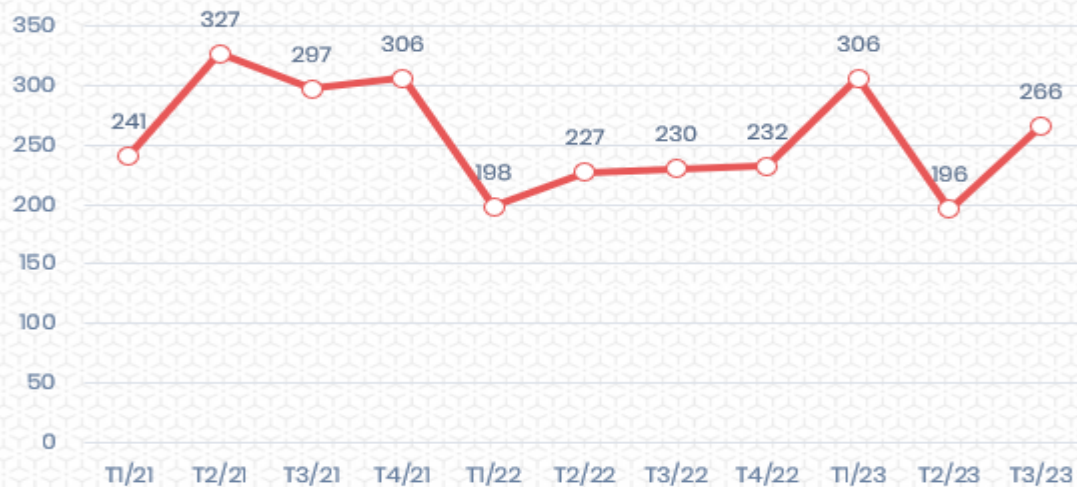
Sumada a la crisis de violencia que vive el municipio, en el cual hemos registrado un importante aumento en la Víctimas Letales del Crimen Organizado, también el estado de Chihuahua en general ha sufrido un repunte de violencia, con casi 1,600 homicidios dolosos en lo que va de este año, sin considerar aún el repunte en Juárez (que es el municipio más violento del estado) de octubre y los primeros días de noviembre.

Es probable que la situación de violencia en Juárez continúe en las siguientes semanas e incluso meses, pues si se trata de una disputa entre diferentes bandas, como parecen indicar tanto las hipótesis de las autoridades como las diversas maneras de llevar a cabo las ejecuciones, e incluso los distintos perfiles de los asesinados.

La coyuntura de las elecciones del 2024 será un escenario propicio para que las diferentes organizaciones busquen cooptar y amenazar a candidatos. Ya van varios hechos de violencia política en el estado en este año. El más reciente en julio, cuando Jorge Guzmán Enríquez, excandidato al gobierno del municipio de Madera, fue ejecutado. Otra variable que podría complicar aún más el escenario serán las constantes llegadas de caravanas de migrantes. Se perfila que, tan sólo en este mes, llegarán más de cinco mil personas a la frontera norte para intentar cruzar a Estados Unidos.

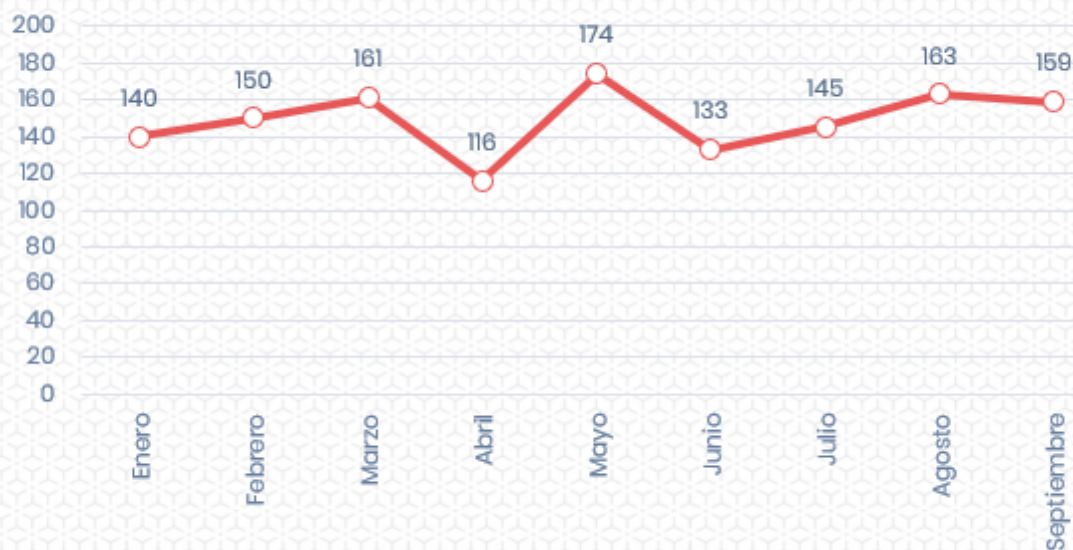


**Tendencia trimestral. Víctimas Letales del Crimen Organizado en Juárez**  
(2021-2023)



\*Fuente: Lantia Intelligence, 2023.

**Tendencia mensual. Homicidios dolosos en Chihuahua.**  
(2023)



\*Fuente: SESNSP, 2023.



## Chiapas registra una arremetida del CJNG en varios puntos

### DINÁMICA CRIMINAL

La dinámica criminal del estado de Chiapas se ha complejizado en las últimas semanas. Si bien hemos reportado una expansión territorial por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación desde el primer semestre de 2023, ahora nos encontramos con una dinámica de violencia que se ha generado en varios puntos del territorio como respuesta ante esta expansión criminal. Se trata del surgimiento de una gran cantidad de actores comunitarios armados que buscan enfrentarse a la violencia y despojo del CJNG. Lo complejo es que reportamos una debilidad de las policías municipales que abre la posibilidad de liderazgos armados y paramilitares que responden a intereses políticos y a veces criminales. Aunado a la omisión de las Fuerzas Armadas de actuar activamente contra el CJNG, vemos que se está configurando un escalamiento mayor de la violencia que podría producirse en la medida en que la contienda electoral de 2024 desestabilice los arreglos políticos y pactos criminales locales.

Esta semana destacamos dos enfrentamientos entre elementos armados del CJNG y fuerzas federales de SEDENA y Guardia Nacional. Por un lado, este martes 30 de octubre se reportó un choque entre un grupo armado y autoridades federales en el mercado de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Tras un enfrentamiento de 40 minutos, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal lograron recuperar el control del mercado. Las autoridades locales no han dado a conocer al grupo criminal (este evento tuvo poca difusión nacional) a pesar de haber sido un enfrentamiento importante dado el nivel de fuego desplegado.

Por otro lado, fuerzas federales y estatales se enfrentaron a un comando del crimen organizado que realizaba tareas de reconocimiento terrestres en Villa Corzo. Luego del enfrentamiento se reportó el hallazgo de un arsenal con varias armas y lanzagranadas pertenecientes al Grupo Delta, comando de élite del CJNG con antecedentes de operar en Jalisco. Les fueron asegurados 13 armas de fuego largas, un aditamento lanzagranadas, cuatro granadas, 74 cargadores para diferentes armas, 1,700 cartuchos, 4 chalecos antibalas y siete vehículos. Se trataría de un comando del CJNG con creciente presencia en la localidad de San Pedro Buenavista.

El 21 de octubre se reportó el asesinato del maestro y activista José Artemio López Aguilar, quien organizara la “Marcha por la Paz” del pasado 12 de octubre en Chicomuselo. En aquella ocasión se manifestaron cinco mil pobladores que exigían el cese de la violencia percibida en semanas recientes. López Aguilar formaba parte de la Sección 40 del SNTE, adherido a la CNTE y militante de MORENA. La arremetida criminal del CJNG no se ha limitado en ejercer violencia contra civiles, como lo prueba este caso. Aunado a lo anterior, destacamos que esta violencia ha provocado una suspensión de actividades educativas que tiene a 250 mil alumnos sin asistir a la escuela en la región cercana a Frontera Comalapa.

De manera paralela, registramos una conflictividad que podría desencadenar nuevas olas de violencia debido a la incertidumbre entre los distintos grupos de autodefensa en varias regiones. Nos referimos, por ejemplo, a un enfrentamiento entre pobladores y el grupo de autodefensa “El Machete”, implicado en agresiones, intimidaciones, detenciones y desapariciones en Pantelhó. La situación es compleja ya que han surgido varios grupos de autodefensas comunitarias como los son “Los Herrera” y otros más que han generado una confusión en la comunidad con respecto a las intenciones y los patrocinadores de los actores armados.

Cabe destacar un caso parecido en la zona de la Selva Lacandona en esta semana, lugar donde la comunidad indígena de mayas lacandones acusa a Isaías Díaz Zenteno, agente municipal de Frontera Corozal, de aterrorizar a la población (tendría retenida a una mujer y a su hija). En este lugar, la violencia no sólo es resultado de la llegada del CJNG (con la toma de control del cruce San Javier en la carretera Palenque-Trinitaria a principio de septiembre) sino también del levantamiento de varios grupos armados que buscan proteger a su comunidad del conflicto mayor entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

No dejamos de lado un ataque ocurrido el martes 31 de octubre en que unos sujetos armados atacaron al ex director de la Policía Municipal de Ocozocoautla, de nombre Franklin. Es la segunda ocasión en que este elemento policiaco es atacado este año, puesto que en febrero también sufrió un ataque similar. En ambos sucesos, el exdirector sobrevivió, sin embargo, destacamos que no cesan los intentos del CJNG por mantener en hostigamiento violento a las policías municipales y así garantizar la impunidad ante su presencia acrecentada en varias localidades. En contraposición, no tenemos reportes de operativos de las fuerzas armadas por tomar el control de una nueva pista de aterrizaje clandestino en Bonampak. Aunque en marzo pasado el presidente López Obrador dio a conocer de esta pista, desde entonces no ha habido operativos para desinstalar esta pista que presuntamente ha sido establecida por el CJNG.



## Aumentan tensiones entre grupos criminales tamaulipecos

### DINÁMICA CRIMINAL

Tras la tregua formalizada la segunda mitad de julio de 2021 entre grupos criminales que resultaron del proceso de atomización del Cártel del Golfo —Los Metros (“El Primito”), Los Escorpiones (facción del Scorpion XIX) y Los Rojos (CDG-Tampico)— la violencia criminal en Tamaulipas gradualmente retrocedió. Entre 2021 y 2022, el número de víctimas letales del crimen organizado (VLCO) que resultaron de las contiendas entre los grupos firmantes fueron excepcionales —si bien continuaron ciertas disputas menores, no hubo entre ellos una a gran escala—, aunque sí continuaron registrándose entre éstos y el Cártel del Noreste. Lo anterior, aunado a la fortaleza de la Policía estatal y las acciones de desmantelamiento que ésta realizó, contribuyó a una tendencia de disminución de la violencia en el estado. En poco menos de dos años (agosto de 2021 a mayo de 2023), la violencia en Tamaulipas dismi-

nuyó en un 93 por ciento (30 y dos víctimas letales del crimen organizado mensuales, respectivamente).

Sin embargo, desde inicios del año se registran una serie de incidentes de violencia que apuntan a un reinicio de las hostilidades; específicamente, entre Los Escorpiones y Los Metros en la zona intermedia entre Matamoros y Reynosa (municipios en los que tienen su sede ambos grupos). De forma destacada, a mediados de octubre se reportó el hallazgo de una narcomanta relevante:

- La manta fue colgada en el municipio de Jiménez, Tamaulipas y, en ésta Los Escorpiones amenazan a Jorge Luis Chávez Hernández (a) “El Flaco” por coordinarse con personal de la SEMAR en su contra. “El Flaco” es uno de los líderes de una facción de Los Zetas Vieja Escuela en San Fernando Tamaulipas que actualmente disputa con Los Escorpiones ese municipio y el de Soto La Marina.

De acuerdo con información disponible, aproximadamente en mayo de 2023 dio por concluida la tregua: Los Escorpiones, decidieron lanzar una nueva disputa por los municipios de San Fernando y Valle Hermoso en contra de Los Metros.

- Todo parece indicar que Los Escorpiones no se sentían en una situación de igualdad con el resto de los grupos criminales firmantes. Es probable que diversas circunstancias hayan hecho que José Alberto Vilano (a) “La Kena”, “Jefe 19” o “S-XIX”, líder de Los Escorpiones, llegara a esta conclusión: [1] Las acciones de desmantelamiento impuestas por el Gobierno federal se concentraron en ellos (éste es el grupo más violento y, por lo mismo, el más importante para autoridades federales); [2] sus aliados se distanciaron, pues no querían que sus ataques les resultaran perjudiciales; y [3] pensaron que corrían el riesgo de convertirse en un grupo subordinado de Los Metros (previamente, ellos funcionaron como brazo armado de “Los Ciclones”).
- Respecto al segundo punto, se tienen indicios de que César Morfín Morfín (a) “El Primito” comenzó a apoyar a la facción de Los Zetas Vieja Escuela que lidera “El Flaco”. Es probable que este apoyo tuviera el objetivo de reemplazarlos como la organización criminal predominante en Matamoros y en otros municipios. Actualmente, Los Escorpiones se enfrentan a Los Zetas Vieja Escuela en Jiménez, Río Bravo, San Fernando, Soto La Marina y Valle Hermoso.





Por otro lado, las acusaciones por supuesta colusión entre Los Zetas Vieja Escuela y la SEMAR probablemente se deban a los operativos que éstos últimos han efectuado a lo largo de 2023; principalmente, como consecuencia del asesinato de ciudadanos estadounidenses de inicios del año. Cabe señalar que este tipo de operativos suelen responder a presiones de agencias estadounidenses, las que actualmente consideran a Los Escorpiones como una de las organizaciones criminales de mayor riesgo en la zona fronteriza de Texas.

Por otro lado, también destaca otra narcomanta desplegada el 25 de octubre en Miguel Alemán, Tamaulipas, en la que una persona con alias “Paleta de Metal 3-5” —quien asegura estar bajo las órdenes de Álvaro Noé Morfín Morfín (a) “El R-8” (hermano de “El Primito” y otra persona con alias “El R-57— amenaza a miembros del Cártel del Noreste y acusa al presidente municipal, Ramiro Cortez Barrera, de colaborar con ellos.

- Se desconoce si efectivamente el alcalde colabora con el Cártel del Noreste. Una explicación alternativa es que el llamado del alcalde al presidente López Obrador y al gobernador Villareal Anaya haya generado disgusto entre las filas de Los Metros. Por lo tanto, éstos pretenden deslegitimar al alcalde para evitar que su llamado sea escuchado (y tropas de las Fuerzas Armadas desplegadas a combatirlos).

## Nuevas amenazas a criminales locales evidencian la expansión del CJNG en Hidalgo

### DINÁMICA CRIMINAL

El pasado 30 de noviembre aparecieron en Hidalgo, en el área limítrofe entre los municipios de Zempoala y Tepeyahualco, diversos mensajes firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En las mantas había amenazas contra grupos delincuenciales locales, específicamente contra asaltantes de vehículos de carga, ladrones de combustible y narcomenudistas. En los mensajes se identificaban por nombre o alias a los principales líderes de pandillas locales; se les informaba que en los siguientes días el CJNG comenzaría con la eliminación de los involucrados en actividades criminales, advirtiéndoles que ya no permitirían más robos ni asaltos.

Además, también circularon nuevos vídeos en los que individuos encapuchados presumían su armamento y vehículos, y justificaban su presencia por instrucciones de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (a) “El Mencho”, líder del CJNG. Los mensajes de Zempoala son el último de los indicios que evidencian la expansión del CJNG en Hidalgo. Hemos registrado en las pasadas semanas actos de violencia atribuidos a esta organización, entre los que destacan una serie de asesinatos y secuestros en los municipios aledaños a Zempoala. La inseguridad en esta región ha provocado malestar en ciudades industriales como Ciudad Sahagún, donde sus habitantes incluso reclamaron al presidente López Obrador para que, junto a las autoridades estatales, frenara la ola de asesinatos, secuestros y extorsiones atribuidos al CJNG.

Parte del malestar creciente en el sur de Hidalgo deriva de la posición ambigua de las autoridades, quienes han mostrado contradicciones al momento de reconocer la presencia del cártel. Hasta ahora hay dos explicaciones oficiales sobre la posible presencia de Cártel Jalisco en Hidalgo. De un lado, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, aseguró que no tenía registro de la presencia de ningún cártel nacional operando en Hidalgo, aunque sí de organizaciones criminales menores: señaló que su equipo se encontraba atento para detectar la incursión de cualquier organización criminal mayúscula como el CJNG. Del otro lado, el general Alfredo Salgado Vargas, recién nombrado comandante de la 18ava Zona Militar de Pachuca, declaró que en Hidalgo sí tenían registrada la presencia de cárteles nacionales, incluyendo el CJNG, y también de bandas y organizaciones locales. El general Salgado también aseguró que el Cártel Jalisco está interesado en capturar el negocio del robo de combustible, por lo que actualmente tiene presencia en 20 de los 84 municipios de Hidalgo por donde pasan los oleoductos de PEMEX: Cuautepec de Hinojosa; Ajacuba; Tula de Allende; San Agustín Tlaxiaca; Atotonilco de Tula; Singuilucan; Atitalaquia; Tepeapulco; Tetepango; Tlaxcoapan; Nopala de Villagrán; Epazoyucan; Santiago Tulantepec; Chapantongo; Tlahuelilpan; Tepetitlán; Pachuca; Tlanalapa; Tepeji del Río; Huichapan; Mineral de la Reforma; y Tezontepec de Aldama.

La discrepancia entre ambas instituciones en Hidalgo revela la falta de coordinación entre los dirigentes de la policía estatal y la SEDENA para articular ante la opinión pública una postura coherente. Este hecho, en su acepción más grave, indica desconfianza entre ambas corporaciones: en ocasiones la SEDENA ha optado por no compartir información clave a los gobiernos locales y restringir la cooperación en inteligencia cuando tiene sospechas de la infiltración de organizaciones criminales en la estructura de seguridad estatal. Sin embargo, también es probable que la postura negacionista del secretario Cruz Neri esté simplemente motivada por intereses políticos, pues el reconocimiento de la presencia del CJNG ya es de suyo un fracaso para la política de seguridad del estado, lo que podría afectar la legitimidad del gobernador Julio Menchaca y de MORENA en el contexto de las elecciones de 2024.

En suma, las amenazas contra las bandas locales evidencian un proceso en curso: el CJNG se expande desde finales del año pasado en municipios como San Juan del Río, Atotonilco, Atitalaquia, Tula, Conejos, Zacamulpa, Praderas, Pedregal, Nopala, Tepeji del Río y Tepetitlán. Ahora, no obstante, también crece en Zempoala, Tepeapulco y Tepeyahualco, donde hasta hace poco tenía una presencia menor. El CJNG reafirma su ya conocida táctica de amedrentamiento contra las bandas locales para expandirse. La intención del CJNG es doble: primero, privar a las organizaciones menores de su participación en negocios criminales y hacerse con el monopolio de la economía criminal en el estado; segundo, “subcontratar” a esas organizaciones locales para que secuestren, asesinen, extorsionen, roben y vendan droga en su nombre. Aunque es alarmante el súbito incremento de casos de violencia en municipios como Zempoala, para las autoridades hidalguenses también puede representar una oportunidad en el corto y mediano plazo. Los ataques sistemáticos y la intención de “limpiar” a las bandas locales tradicionales demuestran que la penetración local del CJNG

en estos municipios de Hidalgo se encuentra en una fase temprana. El gobierno del estado goza aún de una ventana de oportunidad para formular una reacción contundente y contener la expansión del cártel. Pero para ello la policía estatal tendrá que apoyarse en otras instituciones y actores clave como la Guardia Nacional y la SEDENA. No obstante, vaticinamos que, de continuar los evidentes problemas de comunicación, desconfianza y conflicto entre estas corporaciones, la expansión territorial de CJNG y su penetración en las dinámicas locales continuará acentuándose en los siguientes meses.

## El asesinato de los ocho hombres encontrados en Durango podría estar relacionado con el tráfico de fentanilo en Sinaloa; ambos estados buscan desafanarse del caso

### DINÁMICA CRIMINAL

Entre el 22 y 24 de octubre, sujetos armados presuntamente del Cartel de Sinaloa (CDS), levantaron a varias personas en Culiacán. El día 28 los cuerpos de los ocho hombres secuestrados aparecieron en el municipio de Tamazula, Durango, ubicado a menos de dos horas de la capital sinaloense. Medios informativos publicaron que el día 22, seis personas fueron privadas de la libertad en el fraccionamiento Colinas del Rey. Mientras que el 24 un hombre identificado como Germán fue levantado junto a su pareja y sobrino de 13 años después de presentar la denuncia por la privación de la libertad de los seis individuos ante la Fiscalía General de Sinaloa. Otros medios indicaron que sólo la mujer y el menor fueron secuestrados, sin embargo, entre los muertos sí se identificó a un hombre llamado German.

La fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, informó que durante la mañana del 28 de octubre, un convoy de hombres armados ingresó al estado para abandonar seis cadáveres en la calle División del Norte y Real Félix en Tamazula, así como una camioneta ensangrentada donde posiblemente fueron trasladados. Los cuerpos mostraban signos de tortura, heridas de bala, incluso huellas de haber sido atropellados y lividez cadavérica (entre tres y 12 horas sin vida). Indicó que minutos después fueron hallados dos cuerpos más en las mismas condiciones sobre la carretera. En ninguno de los sitios se encontraron casquillos percutidos, por lo que declinaba la competencia del caso a la Fiscalía de Sinaloa, ya que los ocho hombres habían sido secuestrados y probablemente asesinados en dicho estado, en donde además ya estaba abierta una carpeta por desaparición.

Por su parte, la fiscal de Sinaloa Sara Bruna Quiñonez Estrada declaró no estar de acuerdo en que el caso fuera de su competencia porque la carpeta por desaparición se cerraba cuando las víctimas eran encontradas: “Nosotros conocimos de ese asunto en una primera etapa porque se denunció la desaparición de las personas. Entonces iniciamos la carpeta por desaparición. Los cuerpos, ya fallecidos, aparecieron en el estado de Durango, eso nos da una base objetiva para suponer, por una elemental lógica, que fueron privados de la vida allá”.

Aunque los estudios forenses y la identificación de los cuerpos se realizaron en Sinaloa, la fiscal señaló que este trabajo derivó de los convenios de colaboración entre los estados, pero

una vez concluido, se devolvería la competencia de la investigación a las autoridades de Durango. El 2 de noviembre, el gobernador Rubén Rocha Moya ratificó que rechazaban la solicitud de la Fiscalía de Durango para investigar el homicidio. Argumentó que en Sinaloa se han asesinado a personas de otros estados y las autoridades locales se encargan de la investigación y los casos se agregan a su estadística de homicidios.

El conteo de muertos parece ser una de las principales preocupaciones para ambos estados. Si los asesinatos fueran añadidos a la estadística de Durango, se rompería una racha de cuatro días sin registro de homicidios, y se convertiría en el segundo estado más violento del 28 de octubre, sólo por debajo de Guanajuato donde se registraron 11 asesinatos según la estadística federal. En Lantia Intelligence registramos que, en lo que va del año, Durango ha tenido 31 muertes derivadas del crimen organizado, mientras Sinaloa cuenta con 469. Las autoridades duranguenses no han emitido más comunicados respecto a este crimen y su investigación.

Además de la polémica por el rechazo de ambas entidades para tomar las riendas del caso, también destaca la privación de la libertad de un niño de 13 años y de una mujer llamada Pamela Alison Perea Rojo, cuando acompañaron a German, pareja de Perea Rojo, a denunciar el primer secuestro. El cuerpo del menor, al igual que el de los otros hombres, tenía huellas de tortura y heridas de arma de fuego; de ella no hubo rastro.

El 30 de octubre, la Fiscalía de Sinaloa informó que Perea Rojo había sido localizada con vida, sin embargo, la fiscal Quiñonez Estrada, declaró que en realidad no tenían la certeza, ya que sólo habían recibido una llamada telefónica de quien dijo ser Perea Rojo, para avisar estar a salvo y que se trasladaría a Estados Unidos por temor a represalias. Pero se negó a dar más información o alguna prueba de que realmente se trataba de la misma persona. Del caso sólo dijo que fueron llevados en diferentes vehículos, por lo que nunca tuvo contacto con las otras víctimas.

Medios de comunicación informaron que, desde los últimos días de septiembre a inicios de octubre, habitantes de Culiacán y Badiraguato reportaron en redes sociales sobrevuelos de helicópteros del Ejército y la Marina durante las noches, por lo que se rumoró de un operativo para capturar a integrantes del CDS. Las autoridades aseguraron que los vuelos se debían al traslado de personal de ambas instituciones, pero no mantenían ningún operativo. Lo que siguió generando especulaciones, sobre todo cuando el 2 de octubre aparecieron mensajes atribuidos a Los Chapitos en Culiacán, Guamúchil, y la zona rural de Los Mochis, Mazatlán, y El Rosario donde, de nueva cuenta, prohibían la venta, fabricación y transporte de fentanilo en el estado.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer alguna línea de investigación sobre la masacre, sólo se sabe que los sicarios dejaron una cartulina donde los acusaban de traición ("Esto les va a pasar a todos los dedos y sapos"), por lo que el caso podría estar relacionado con un operativo que llevó a cabo la Marina el 20 de octubre, en el que presunta-

mente se detuvo a dos personas en el mismo fraccionamiento en donde las víctimas fueron levantadas. Autoridades no han confirmado información de dicho operativo.

En este caso destaca no solamente la actitud de las fiscalías de Durango y Sinaloa ante este múltiple asesinato, donde ambos estados buscan limpiarse las manos y no aceptar ninguna responsabilidad. Las declaraciones a cuentagotas por parte de ambas fiscalías, incluso el que la Fiscalía de Sinaloa haya asegurado haber encontrado con vida a Perea Rojo y después aclarar que sólo se trató de una llamada telefónica sin tener certeza del hecho, demuestran poca eficiencia en sus trabajos. En Lantia Intelligence tenemos reportes de actividad del CDS en el estado de Durango; Tamazula es uno de los municipios en donde tiene presencia por lo que es probable que el crimen se relacione con las actividades de dicho cartel, sobre todo con Los Chapitos, que siguen en el escrutinio público internacional por haber sido denunciados como los principales traficantes de fentanilo y cocaína en Estados Unidos. El presunto operativo realizado días previos en el mismo fraccionamiento donde los primeros seis hombres fueron levantados, así como el secuestro de las tres personas que acudieron a denunciar este delito, no parecen ser casos aislados. Igualmente, los continuos mensajes por parte de Los Chapitos por deslindarse de la fabricación y tráfico de fentanilo podrían ser parte de su estrategia para aparentar inocencia, o quizás sea una muestra de problemas al interior del grupo, donde alguna fracción esté actuando por cuenta propia.

Otro caso que muestra una posible problemática en el cartel, fue la del ataque el 28 de septiembre, en un hospital de Culiacán cuando hombres armados ingresaron para rematar a dos heridos luego de un enfrentamiento entre criminales en Badiraguato. Este hecho dejó cuatro muertos, entre ellos un médico residente, y otros tres civiles heridos. Casos como éste, da testimonio de la importancia de evitar dejar evidencia de las actividades del CDS o demostrar su control en el estado.

Asimismo, no es la primera vez que se detecta movimiento del cartel en Tamazula, anteriormente ha utilizado las zonas serranas para esconderse de las autoridades sinaloenses, por lo que para ambas entidades, este municipio debería representar un foco de alerta. Sin embargo, cuando se levantó la denuncia por desaparición, la Guardia Nacional realizó los patrullajes de búsqueda en la dirección contraria, en la sindicatura de Los Tamarindos, ubicada hacia el suroeste de Culiacán (Tamazula se localiza al noreste).

Este caso evidencia la falta de colaboración y de información de los operativos y las investigaciones entre las autoridades de ambos estados ya que existen muchos vacíos informativos, que si bien, podrían responder a cierta confidencialidad y seguridad de sus actividades, a una semana del crimen sólo aparenta desorganización, lo que provoca más rumores y temor entre los habitantes ante este tipo de casos. Además, deja a las instituciones como carentes de verdadera autoridad y responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos.

Por el momento no esperamos que la situación de violencia en Sinaloa disminuya; las actividades de Los Chapitos provocan encono entre las autoridades estadounidenses, y las actividades criminales del grupo son un punto de gran interés de cara a las elecciones del



2024 en ese país. Mientras tanto, Los Chapitos buscan mantenerse al margen para evitar la detención de alguno de sus líderes, sobre todo después de la extradición de Ovidio Guzmán. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, declaró en septiembre que solicitará la captura y extradición de los otros tres hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán. Por lo que es probable que los tres descendientes de El Chapo, sólo traten de aparentar inactividad mientras se llevan a cabo las campañas presidenciales norteamericanas, pero el trasiego de drogas continuará.



**Después de una semana de la destrucción ocasionada por el paso del huracán OTIS en Acapulco, el tema de la inseguridad comienza a perfilarse como el gran reto para su reconstrucción**

#### RIESGO SOCIAL

Existe una guerra de información sobre la situación real que prevalece en las 389 colonias y 234 localidades semiurbanas y rurales que cubren los 1,724.6 kilómetros cuadrados del municipio de Acapulco. Por un lado, el gobierno federal insiste en que los servicios se están restableciendo con prontitud para normalizar la situación minimizando la gravedad de los efectos del huracán, y por otro lado, hay múltiples testimonios en prensa y redes sociales de que hay enormes dificultades en la vida cotidiana de las personas y que la ayuda solo está paliando las situaciones más críticas como alimentación y agua.

En particular el tema donde hay más coincidencia de nuevas dificultades es la inseguridad que se ha desbordado en la ciudad (no hay prácticamente ninguna cámara de seguridad operando, tanto por el huracán como por los saqueos y destrucción de infraestructura en zonas comerciales posteriores al meteoro). Respecto a los saqueos es relevante señalar que se extendió a todo tipo de negocios, y que los daños infringidos fueron una combinación entre crimen organizado, falta absoluta de vigilancia y el desbordamiento social propio de una crisis de pánico por el desastre tan evidente.

Esta actitud de rapiña observada en esos primeros días, ha generado entre la población el temor de ser saqueados o robados en sus viviendas ya que muchas quedaron sin seguridad perimetral al caerse bardas, mallas, ventanas y portones, aumentando considerablemente la percepción de inseguridad.

La violencia tendrá un nuevo caldo de cultivo en un municipio donde conviven tan diversas situaciones sociales, se habla de un Acapulco moderno de la zona costera y diamante que fue saqueado, pero donde los servicios están regresando paulatinamente y donde se ha concentrado el esfuerzo informativo de los medios de comunicación y la acción de las autoridades. Existe un Acapulco de amplias zonas populares, la más numerosa poblacionalmente, tanto en la zona del anfiteatro y colonias altas, como de la zona de Renacimiento y Zapata, y Pié de la Cuesta con severos daños en las viviendas, en pequeños comercios y servicios básicos. Por último, está el Acapulco de las zonas rurales donde la destrucción del huracán estuvo acompañada de inundaciones en amplias zonas bajas, y donde la incomunicación

ha sido la dificultad principal para hacerles llegar ayuda, a población que sufría, aún antes del huracán, una deficiente provisión de servicios públicos. El cuadro completo impone retos diferenciados, que están totalmente interrelacionados.

En contraste con lo que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el restablecimiento de la luz en un 90 por ciento de la ciudad y el cese de robos, habitantes de una de las colonias más emblemáticas de la ciudad, la colonia Progreso, denunciaron que a una semana del desastre no se les ha restablecido el servicio de energía eléctrica y aseguraron que han sido víctimas de saqueos, por lo que se han organizado para proteger sus hogares. Han tenido que protegerse con barricadas para salvaguardar su integridad física, porque han surgido grupos de personas que se están robando casas. El *modus operandi* que ha sido denunciado es de personas que se presentan como personal de CFE o Protección Civil, y que aprovechan cuando se les abre la puerta para ingresar y robar.

- Estas acciones de autodefensa se han extendido a otras áreas como la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200, en la zona de punta diamante frente al Fórum Mundo Imperial, donde se han creado su propia guardia ciudadana de seguridad para contener los intentos de robo en casa habitación y departamento, así como de piezas de automóvil ante la falta de apoyo de rondines policiacos, y aprovechando la oscuridad por la falta de energía eléctrica que aún no se restablece.
- En colonias de la zona centro como Hogar Moderno o Barrio de la Fábrica, los vecinos decidieron cerrar sus calles con las láminas para evitar que entren los ladrones y un grupo de ellos, armados con pistolas y machetes han impuesto un virtual toque de queda, a partir de las 10 de la noche está prohibido salir a la calle.
- En los Bienes Comunes de Cacahuatpec en la comunidad de Huamuchitos, en la zona rural de Acapulco, sus pobladores advierten que en sus pueblos se vendrá la violencia y los robos, especialmente porque perdieron su medio de subsistencia y sus cultivos como maíz, calabaza, jamaica y ajonjolí. Este pueblo era marginado antes del huracán, después del meteoro han quedado en la pobreza absoluta.
- El viernes 27 de octubre por la noche, en la salida a la autopista a Chilpancingo, a la altura de la Colonia Renacimiento, decenas de personas saquearon algunos de los vehículos que llevaban víveres para los damnificados.

En el municipio de Acapulco existen 220,033 hogares familiares de acuerdo con INEGI, en ellos se estima una población de 773,024 personas los cuales prácticamente en su totalidad sufrieron afectaciones no sólo en sus viviendas sino en buena parte de la infraestructura que les provee los servicios básicos: electricidad, agua potable, alumbrado público, escuelas, centros comerciales, supermercados, mercados públicos, pequeño comercio, talleres, centros de salud y hospitales, conectividad, telefonía y videovigilancia en vía pública. Tan sólo en el sector educativo existen en Acapulco 393 escuelas preescolares, 503 primarias y 185 secundarias, cuya reapertura aún no ha sido anunciada por los daños que sufrieron. Se anun-

ció la suspensión de actividades para la semana del 6 al 10 de noviembre por no haber condiciones que garanticen la seguridad de alumnos y trabajadores, y se dedicara esta semana a labores de limpieza y censo de daños.

La recuperación de estos servicios será lenta, sobre todo porque en la parte que corresponde al sector privado habrá precaución para plantear reaperturas completas, en tanto no se garanticen condiciones plenas de seguridad. Así lo han anunciado las principales cadenas de supermercados que abrirán solo para la venta de productos básicos a partir del lunes 6 de noviembre.

El tema de la inseguridad se verá acompañado de otras emergencias, entre ellas la sanitaria, por la dificultad para limpiar y sanear el puerto y las localidades rurales, que sin duda puede derivar en un brote de enfermedades infecciosas, que será difícil de combatir en un escenario de escasez, dificultando las tareas de reconstrucción.

El reto de la inseguridad después del desastre natural del huracán Otis, demanda una participación directa y prolongada del gobierno federal a través de la GN, del ejército y la marina. Es previsible que el crimen organizado busque recuperar sus fuentes de ingreso en lo inmediato, y con ello ante una mayor presencia policial (aproximadamente 19 mil policías de la GN, soldados y marinos desplegados por el huracán) se presentarán mayores incidentes y enfrentamientos en el corto plazo. También se reducirá paulatinamente la existencia de barricadas y puestos de control en las colonias ante el avance en la electrificación del puerto, y el establecimiento de los cuarteles de la GN anunciados. La reconstrucción tiene en la seguridad un aspecto central para acelerar la llegada de inversiones y empleo.



**Se han registrado 361,466 homicidios dolosos en los últimos tres gobiernos federales, de los cuales el 70% se relaciona con el crimen organizado**

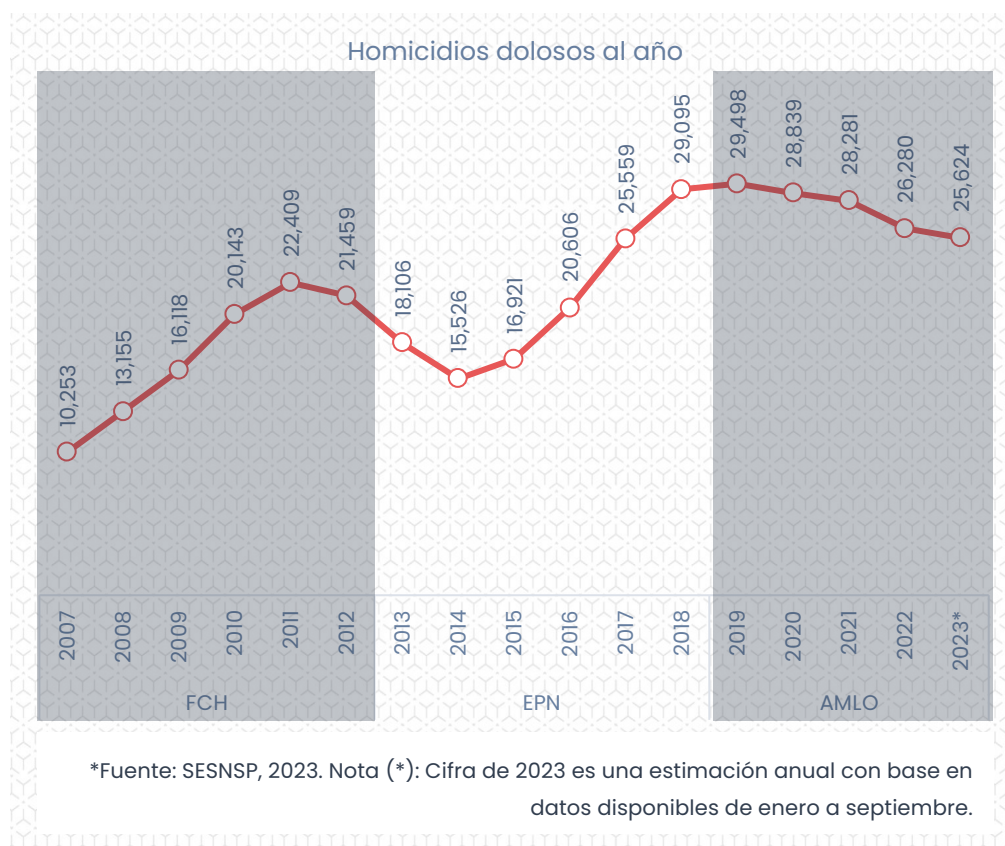
#### ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

Lantia Intelligence presenta un análisis comparativo de la evolución de homicidios dolosos en los últimos tres sexenios. Para lo anterior se empleó el número de carpetas de investigación por este delito desde enero de 2007 a septiembre de 2023. Los principales hallazgos muestran lo siguiente:

- Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (FCH), 2007 a 2012, se registraron 103,537 homicidios dolosos, lo que implica un promedio anual de 17,256.
- En el periodo de Enrique Peña Nieto (EPN), 2013 a 2018, se contabilizaron 125,813 homicidios dolosos y un promedio anual de 20,969, por lo que tuvo un aumento del 21.5% respecto al sexenio de FCH.
- En lo que va de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (enero de 2019 a septiembre de 2023) se han registrado 132,116 homicidios dolosos (6,303 más que todo el sexenio de EPN), y se estima que al finalizar 2023 el total de homicidios en

los últimos cinco años será de 138,522 con un promedio anual de 23,087, lo que significaría ya un aumento del 10.1% respecto a la administración anterior.

- Al estimar el total de homicidios dolosos para el final del sexenio de AMLO, se tendría una cifra final de 163,506 homicidios dolosos y un promedio anual de 27,251 y, por tanto, un aumento del 30.0% respecto al periodo de EPN y del 57.9% respecto al de FCH.
- Cabe indicar que en el periodo de AMLO es donde se ha observado una disminución anual en tres años seguidos, en 2020 del 2.2%, en 2021 del 1.9%, en 2022 del 7.1%, y se estima que 2023 también finalizará con una disminución del 2.5%. De 2012 a 2014 (último año de la administración de FCH y primeros dos años de la de EPN) se habría observado disminuciones del 4.2%, 15.6% y 14.2%, respectivamente, sin embargo, en los siguientes cinco años (2015 a 2019) se registraron aumentos consistentes y sube de 16,921 a 29,498 homicidios al año (74.3% de aumento).
- De los 361,466 homicidios dolosos registrados de enero de 2007 a septiembre de 2023, el 69.6% se trata de víctimas letales del crimen organizado. De enero de 2012 a septiembre de 2023 se tiene registro que una de cada 10 víctimas letales del crimen organizado es una mujer, y cinco de cada 100 víctimas menor de edad.
- Los estados que han mostrado una mejora a través de los sexenios son: Guerrero, el cual se encontraba en el segundo lugar durante la administración de FCH (con 1,525 homicidios dolosos al año) y baja a la octava posición en el periodo de AMLO (con 1,307 homicidios dolosos al año); Nuevo León, quien baja del quinto lugar (con 851 homicidios al año) al décimo (con 1,074), aunque en este caso el estado baja de posición debido a que otras entidades registran mayores niveles de violencia y no porque en Nuevo León se contabilicen menos delitos de este tipo; y Sinaloa, el cual baja del cuarto lugar (con 1,252 homicidios al año) al 17 (con 606).
- Chihuahua ha mostrado una mejora, pues del primer lugar (con 2,465 homicidios dolosos al año) baja al cuarto (con 1,995), aunque se mantiene entre los cinco entados más violentos a lo largo de los tres sexenios. Mientras que el Estado de México se posiciona en el tercer lugar en el sexenio de FCH (con 1,421 homicidios al año), en el primer lugar en el periodo de EPN (con 2,095), y baja nuevamente al tercer lugar en la actual administración (con 2,385), este caso, al igual de Nuevo León, bajan de posición debido a que otras entidades registraron mayores niveles de violencia y no porque en la entidad se registren menos homicidios.
- Por otra parte, los estados que han mostrado un deterioro son Baja California, el cual se encontraba en la octava posición (con 710 homicidios dolosos al año) en la administración de FCH y sube al segundo lugar en la actual (con 2,481); Guanajuato, quien se encontraba en el lugar 17 (con 452 homicidios dolosos al año) y actualmente es el primer lugar en homicidios dolosos (con 2,858); y Michoacán, quien sube del lugar 11 (con 668 homicidios al año) al quinto lugar (con 1,862).



**Homicidios dolosos a nivel estatal (2007 a 2023)**

Entidad	FCH		EPN		AMLO*	
	Total	Promedio Anual	Total	Promedio Anual	Total	Promedio Anual
Aguascalientes	370	62	314	52	392	78
Baja California	4,261	710	8,391	1,399	12,404	2,481
Baja California Sur	208	35	1,191	199	254	51
Campeche	309	52	405	68	413	83
Chiapas	2,882	480	2,919	487	2,218	444
Chihuahua	14,788	2,465	8,091	1,349	9,977	1,995
CDMX	4,543	757	5,753	959	4,926	985
Coahuila	2,378	396	2,014	336	805	161
Colima	660	110	2,285	381	3,202	640
Durango	4,016	669	1,672	279	625	125
Guanajuato	2,712	452	6,895	1,149	14,290	2,858
Guerrero	9,150	1,525	12,362	2,060	6,535	1,307



### Homicidios dolosos a nivel estatal (2007 a 2023)

Entidad	FCH		EPN		AMLO*	
	Total	Promedio Anual	Total	Promedio Anual	Total	Promedio Anual
Hidalgo	751	125	945	158	1,318	264
Jalisco	4,715	786	7,507	1,251	8,655	1,731
México	8,528	1,421	12,568	2,095	11,924	2,385
Michoacán	4,009	668	6,487	1,081	9,309	1,862
Morelos	2,542	424	3,419	570	5,029	1,006
Nayarit	1,470	245	967	161	797	159
Nuevo León	5,103	851	3,706	618	5,371	1,074
Oaxaca	4,212	702	4,700	783	4,230	846
Puebla	2,856	476	3,860	643	4,565	913
Querétaro	472	79	828	138	886	177
Quintana Roo	1,298	216	1,907	318	3,028	606
San Luis Potosí	1,744	291	1,963	327	2,700	540
Sinaloa	7,513	1,252	5,938	990	3,029	606
Sonora	2,826	471	3,663	611	6,575	1,315
Tabasco	887	148	1,713	286	1,991	398
Tamaulipas	3,453	576	3,968	661	2,522	504
Tlaxcala	268	45	512	85	621	124
Veracruz	3,743	624	6,492	1,082	5,535	1,107
Yucatán	230	38	279	47	202	40
Zacatecas	640	107	2,099	350	4,194	839
Nacional	103,537	17,256	125,813	20,969	138,522	27,704

\*Fuente: SESNSP, 2023. Nota (AMLO\*): Cifra de 2023 corresponde a una estimación anual con base en datos disponibles de enero a septiembre; y el promedio anual considera cinco años de gestión.